

La nueva geopolítica de la alimentación: políticas para una autonomía resiliente¹

Adriana Moreno Blanco²

El informe publicado por el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food) en marzo del 2026, financiado por la Rosa-Luxemburg-Stifting realiza un análisis de como la configuración geopolítica desestabiliza los sistemas alimentarios globales. Este documento se estructura en tres secciones que van desde el diagnóstico que describe cuales son los factores que configuran la nueva geopolítica de la alimentación y cuales son sus efectos en la seguridad alimentaria; en segunda instancia se presentan las herramientas de gestión de mercado, sus bases históricas, algunos casos y las críticas que enfrentan, y finalmente integra el concepto de autonomía resiliente en el análisis y propone opciones de política, cerrando con conclusiones y una presentación del IPES-Food.

El panorama internacional se ha visto marcado desde inicios del 2025 por una serie de hechos que han generado tensiones tanto comerciales como militares que han incidido en el mapa agrícola mundial. En un año, Estados Unidos ha multiplicado sus aranceles alcanzando niveles nunca antes vistos desde la Gran Depresión, con medidas aplastantes como el impuesto de 50 por ciento a las exportaciones provenientes de Brasil y la respuesta casi inmediata de China sancionando a la soya americana.

A estas disputas económicas se entrelazan conflictos militares que cierran corredores vitales: La guerra en Ucrania que ha detenido significativamente las exportaciones de granos básicos como trigo, maíz y de girasol, generando un vacío en los mercados internacionales. Y a la par la creciente tensión entre Israel e Irán, que mantiene en riesgo las condiciones de seguridad del estrecho de Ormuz, corredor marítimo por el que transita una proporción importante de fertilizantes y minerales críticos para la agricultura mundial.

Los recortes en los compromisos internacionales de potencias como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suecia, Finlandia, Francia y Canada que han debilitado los mecanismos de cooperación global, impactando a organismos multilaterales como la ONU, la OMC,

¹ IPES-Food. (2026). La nueva geopolítica de la alimentación: políticas para una autonomía resiliente. IPES-Food.

² Consultora internacional. Correo electrónico: aymorenoblanco@gmail.com

minimizando su capacidad de acción; factores que se traducen en fragmentación del panorama global, debida a la pérdida de cohesión entre las redes internacionales, vulnerabilidad en las rutas comerciales e impacto en la gobernanza mundial.

El informe alerta también sobre las crecientes presiones en la seguridad alimentaria; con precios de los alimentos 35% arriba de los niveles reportados en 2019, con marcados episodios de inflación con niveles de hasta 30 por ciento en países de bajos ingresos desde el 2023. Entre mayo – agosto del 2025 la inflación alimentaria superó 5% en casi la mitad de los países de bajos ingresos frente a, solo uno de cada 5 países de ingresos altos según datos del Banco Mundial.

El gasto mundial en importación de alimentos alcanzó 2.2 billones de dólares. En países menos desarrollados las compras externas incrementaron de 41,000 a 59,400 millones entre el 2020 - 2024, y en los países en desarrollo importadores netos de alimentos el aumento fue de 108,000 a 155,900 millones para el mismo periodo. Este incremento en la deuda, está vinculado directamente a la ascendente concentración del sector agroindustrial. Las corporaciones dominantes de semillas y agroquímicos, se redujeron de 6 a 4, consolidando mas el mercado; Kroger y Nutrien reconocieron que fijaron sus precios por encima de los costos de producción, acrecentando la presión sobre los sistemas alimentarios y recalcando las distorsiones en los mercados internacionales.

En este contexto, el informe subraya la relevancia histórica de las reservas públicas de alimentos, concebidas como sistemas que integran tres funciones esenciales: la compra estratégica de productos, su almacenamiento y la liberación regulada mediante subastas o distribución directa. Estas herramientas de política pública, utilizadas desde tiempos antiguos –desde la dinastía Han en China hasta la República romana– fueron en gran medida

desmanteladas en el Sur global durante las décadas de 1980 y 1990, como resultado de los programas de ajuste estructural promovidos por el Banco Mundial y el FMI. Dichos esquemas podían funcionar tanto como reservas de emergencia así como mecanismos de estabilización, al establecer precios mínimos y máximos para proteger el mercado interno.

Se presentan como ejemplo de las dos dimensiones de reservas públicas a la Corporación Alimentaria de India fundada en 1965, tras la hambruna de Bengala en 1943, garantizando a los hogares más pobres, 35 kg de cereales al mes a precios subsidiados a través de su Sistema de Distribución Pública Dirigida, iniciando en 1997 con un presupuesto anual aproximado de 24 mil millones de dólares; no obstante en el informe se reconoce que 30% de las 20 millones de TM distribuidas anualmente no llega a los beneficiarios y prevalece 12 por ciento de desnutrición crónica –alrededor de 174 millones de personas– sin embargo sin este programa contra el hambre la situación sería peor.

En África Occidental, la Reserva Regional de Seguridad Alimentaria de la CEDEAO enfrenta desafíos fiscales, de infraestructura y de gobernanza, derivados de una gestión deficiente, de la intromisión política y, sobre todo, la dependencia de financiamiento externo que desvincula las prioridades regionales de las agendas de los donantes. El informe también advierte un riesgo de fragmentación: que con la salida de Burkina Faso, Malí y Níger de la CEDEAO en enero de 2025, hay un serio riesgo de fragmentación, al excluir del bloque a países que concentraban más de la mitad de las reservas alimentarias regionales, lo que incrementa la vulnerabilidad y podría profundizar la crisis.

En Canadá y Noruega, los sistemas de gestión de la oferta en los sectores lácteo y avícola han permitido mantener ingresos estables para los productores, en contraste con la Unión Europea, donde la eliminación de las cuotas

lácteas en 2015 antecedió la crisis del sector entre 2014 y 2016. No obstante, el informe también señala críticas a estos esquemas: en Canadá, la gestión de la oferta representa un costo anual estimado de 444 dólares canadienses por hogar, mientras que en Noruega los consumidores pagan, según la OCDE, un 51 por ciento más por los productos lácteos que en el resto de Escandinavia.

El informe también menciona las limitaciones que los acuerdos comerciales internacionales impone a estos instrumentos. Destaca que, durante la segunda administración de Trump, tanto la gestión de la oferta láctea de Canadá como las reservas públicas de cereales de India fueron utilizadas como elementos de negociación –como moneda de cambio– en acuerdos comerciales. Asimismo, señala que el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, ofrece un margen reducido para otorgar un trato diferenciado a productos sensibles; sin embargo, las distorsiones derivadas de los precios fijados por los gobiernos han generado disputas comerciales que aún permanecen sin resolver.

El informe acentúa tres aportes centrales:

1. La elaboración de un diagnóstico geopolítico integrado, que conecta fenómenos aparentemente dispersos –aranceles, conflictos bélicos, recortes en cooperación internacional y debilitamiento de instituciones multilaterales– bajo una lógica explicativa común, en lugar de tratarlos como hechos aislados.
2. La relevancia de recuperar instrumentos de política pública relegados por el neoliberalismo de los años ochenta, sustentada en ejemplos concretos y no únicamente en argumentos normativos.
3. La incorporación del concepto de *autonomía resiliente*, basado en principios de solidaridad, equidad, diversidad y agencia, concebido como

una categoría intermedia entre la plena integración a los mercados globales y la desconexión, en diálogo con las estructuras o marcos normativos de soberanía alimentaria impulsados por los movimientos campesinos.

En el informe se identifican también limitaciones: no se logra equilibrar el diagnóstico versus las soluciones propuestas, se explica cómo el poder de bloques como Estados Unidos y China, pueden redefinir unilateralmente las reglas del comercio agrícola. Se plantea que la cooperación regional y las alianzas entre países con intereses afines, puede ser la respuesta principal, sin mencionar cuál es su capacidad real para hacerle contrapeso a esas asimetrías.

En segundo lugar, se da por sentado que los países con mayor deuda –los que necesitan más avances en términos de autonomía resiliente– deben recibir un alivio de la deuda como requerimiento previo. Sin embargo, no se menciona qué mecanismos o actores podrían asegurar esto en un contexto global de recortes generalizados a la cooperación internacional.

Finalmente aunque el informe documenta los fallos en los programas de existencias públicas (corrupción, financiamiento insuficiente), no distingue si los problemas son típicos del instrumento de política o son producto de un diseño institucional deficiente, aspectos clave para quienes deban decidir sobre su implementación.

Definitivamente, el informe es un aporte relevante para redefinir la gobernanza de los sistemas alimentarios ante un escenario creciente de inestabilidad geopolítica. Su utilidad se puede delimitar en tres ejes:

1. Para la formulación de políticas públicas, sistematizando experiencias nacionales de gestión de mercados, que pueden ser referentes en otros contextos.

2. En el trabajo de los movimientos sociales y organizaciones campesinas, al brindar evidencia comprobable a las demandas de soberanía alimentaria que se han sostenido históricamente.
3. En el ámbito académico, incorporando la *autonomía resiliente* como marco conceptual que vincula la gestión de mercado con principios de equidad y sostenibilidad.

Su principal contribución es demostrar con evidencias y no solo argumentos normativos, que todas las decisiones sobre almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos siempre están influenciadas por diferentes consideraciones políticas.

El informe, elaborado por el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food), financiado por la Rosa-Luxemburg-Stiftung y publicado en marzo de 2026, ofrece un análisis sobre cómo la reconfiguración geopolítica actual está desestabilizando los sistemas alimentarios globales. Examina el papel de las herramientas de gestión de mercado –principalmente las existencias públicas de alimentos y los sistemas de gestión de la oferta– en el fortalecimiento de la autonomía de los sistemas alimentarios nacionales. El trabajo, liderado por Jennifer Clapp junto con su equipo de investigación y el grupo de trabajo de IPES-Food copresidido por Olivier De Schutter y Lim Li Ching, combina este diagnóstico geopolítico con estudios de caso en India, África Occidental, Canadá y Noruega.